**INICIAN DEMANDA DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD –
SOLICITAN SE DECRETE MEDIDA INNOVATIVA PREVIA**

Sr. /Sra. Juez:

Santiago **BOUQUET ROLDÁN**, abogado, (dom. electr. **23-08607598-9**), por la **ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTÍCULOS DE CAZA Y PESCA –AICACYP-**, con domicilio social en Mariano Moreno 1420, C.A.B.A.; **Juan Alberto TEGIACCHI**, DNI N° 7.793.580, con domicilio real en Calle 61 N° 2832 - La Plata - Provincia de Buenos Aires, por su propio derecho y **Gustavo Ariel BURSZTYN**, DNI N° 16.288.561, con domicilio real en Av. Olazabal 5377 Piso 7 Depto 2 – C.A.B.A., por su propio derecho, con el patrocinio letrado de los Dres. **ALEJANDRO CARRIÓ** (dom. electr. **20.11045205.6**) y **ALBERTO F. GARAY** (dom. electr. **23-10795363-9**), constituyendo domicilio procesal conjuntamente con los letrados mencionados en Esmeralda 909, 2° A (Estudio **CARRIÓ & GARAY ABOGADOS**), a V.S. se presentan y dicen:

I. OBJETO

Que, por las representaciones invocadas venimos a iniciar demanda contra el ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS - solicitando se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 27.192, Resolución ANMAC N° 23/2016 y su Anexo I, Resolución ANMAC N° 54/2017 y resoluciones y disposiciones concordantes. Eventualmente, si se los considerare vigentes, declare oportunamente la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 29 la ley 20.429/73 y 54 a 56 del decreto reglamentario 395/75 y de toda otra norma que los haya sustituido.

Asimismo, y con carácter previo a disponer el traslado, solicitamos se decrete una medida cautelar innovativa que suspenda la vigencia de la Resolución 23/2016 y concordantes de la ANMAC relacionadas con la obtención del certificado psicofísico. En su lugar, provisoriamente, hasta que se dicte sentencia definitiva y sin que esto implique renunciar a la invalidez de las normas cuestionadas, solicito se restablezca la vigencia del régimen anterior, según las Disposiciones 197/2006 y concordantes.

Una medida cautelar de estas características mantendría el equilibrio entre los intereses de ambas partes. Pues (i) no perturbaría el normal funcionamiento del servicio. De hecho, el régimen del certificado psicofísico cuya reinstalación provisional se requiere es el mismo en base al cual se venía funcionando hasta el mes de agosto de presente año 2017 y es el mismo que subsiste vigente en la mayoría de las provincias. (ii) Resguardaría los derechos constitucionales de los usuarios, médicos y asociaciones vinculadas a la actividad que gestionan dicho certificado cuya violación se ha descrito en las páginas antecedentes.

II. REPRESENTACIÓN - LEGITIMACIÓN

Conforme surge del poder que en copia acompaño, Santiago Bouquet Roldán es mandatario judicial de la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP) y en tal carácter y representación solicita desde ahora se lo tenga por presentado, por parte, por denunciado el domicilio real y constituido el procesal y el electrónico.

Las actividades relacionadas con la caza, la pesca, el camping y el uso y comercialización de armas de fuego destinadas a algunos de esos fines, están íntimamente conectadas. Por ello es que la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP), co-actora en este litigio, nuclea tanto a

la industria cuanto al comercio, a los clubs dedicados a los deportes conexos y a los usuarios.

En lo que hace a la legitimación de esta última para estar en este juicio, el Estatuto de AICACYP expresa:

Artículo 2°. La Asociación tiene por objeto defender y coordinar los esfuerzos de la industria, el comercio, los deportistas y los aficionados, para el fomento de la caza, el tiro, y la pesca deportivos; del camping, la náutica, y las actividades turísticas afines a estos deportes, la conservación de las especies, y la educación de los deportistas, los aficionados y el público sobre los problemas relacionados con estos deportes...

Artículo 5°. Podrán ser miembros de esta Asociación los industriales y comerciantes de los ramos interesados, las sociedades que se dediquen a la fabricación o venta de artículos aplicados a estos; los deportistas y los aficionados a los deportes indicados en el Artículo 2°, y las entidades oficiales o particulares que persigan fines concordantes con los suyos. Los miembros deberán tener antecedentes honorables; y los deportistas y aficionados ser mayores de 18 años.

Además, a solicitud de sus afiliados o de terceros, esta Asociación gestiona habitualmente, con carácter comercial, la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario, tanto de usuarios del interior del país cuanto de los de esta Capital.

A mayor abundamiento, como recordó el Dr. Rosatti en el considerando 38 de su voto en autos *“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio de Energía”* (causa 8399/2016, fallada el 18.08.16), debe tenerse presente que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación está vacante, *“circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios...”* (*idem*, considerando 45 de Lorenzetti-Highton de Nolasco y considerando 44 del voto del Dr. Maqueda). Es decir que cientos o miles de usuarios con intereses homogéneos –obtención de la Credencial y realización

previa del examen psicofísico- carecen del representante específicamente creado por la Constitución para tutelar los intereses colectivos.

En interés de esa doble legitimación –la representación colectiva y la representación individual–, en la reunión de Comisión Directiva del pasado 9 de octubre se resolvió iniciar acciones legales para conjurar los perjuicios que se generan por igual a todos los usuarios de armas o a toda persona que para ser un usuario de armas requiera la obtención de la llamada Credencial de Legítimo Usuario¹. Dicho perjuicio es consecuencia directa del llamado “Certificado Psicofísico (Artículo 1º, Resolución ANMAC N° 23/16).

Todo lo anterior solventa la legitimación activa de AICACYP.

Juan Alberto TEGGIACHI es legítimo usuario de armas de fuego, con credencial vencida el 1º de octubre de 2017 y tiene intención de obtener la renovación de su credencial. Su única arma con tenencia emitida por el ex RENAR la dejó en consignación, de conformidad al art. 69 inc. e del Decreto 395/75 en Armería El Colorado - UCOM 9733811 - Calle 43 N° 433 - La Plata - Buenos Aires.

Gustavo Ariel BURSZTYN, es Médico, Médico Legista, Psiquiatra, Técnico en Identificación Criminal - MN 74841 - MP 446238 - El Dr. Bursztyn ha tenido a su cargo numerosas evaluaciones psicofísicas requeridas para obtener la Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego y se dedicó con asiduidad a ello a partir de lo autorizado por la Disposición 197/06. Además es Comandante Principal Médico de Gendarmería, ha sido médico de Fuerzas Especiales y Profesor Militar del Centro de

¹ Resolución de Comisión Directiva que se acompaña con esta presentación: “Vistas las irregularidades operativas que se plantearon en el comunicado de prensa como reflejo de las expresiones del conjunto de asociados de AICACYP, con más los incumplimientos de la normativa de ANMAC por parte del adjudicatario del servicio que fueran detectados por esta Comisión Directiva, se recurrió a nuestros asesores letrados para analizar la viabilidad de acciones legales que pudiera encabezar AICACYP contra el Estado Nacional o contra Dienst Consulting SA o contra ambos en conjunto dirigida a impedir la continuidad del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos dispuesto por la Resolución ANMAC N° 13/2016. Más allá de que se está aguardando el dictamen profesional, se aprueba por unanimidad que AICACYP inicie las acciones legales que recomienden los asesores letrados.”

Capacitación para misiones en el exterior y Jefe de División Medicina Legal de la Dirección de Pericias, hoy de Criminalística de la Gendarmería. Ha participado además en peritajes que el RENAR le encargaba a Gendarmería. Es además tirador deportivo. Se acompaña su CV con esta demanda. La reglamentación aquí objetada afecta su libertad de trabajo debido a que, a partir de esas disposiciones, se le impide continuar expidiendo dichos certificados a los efectos de acreditar la salud psicofísica de los aspirantes a obtener la Credencial de Legítimo Usuario. También afecta su actividad vinculada con el tiro deportivo.

Las regulaciones aquí controvertidas, relacionadas con el certificado psicofísico que se pide a los usuarios, afectan la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario de armas de fuego². El insólito y sin precedentes esquema creado por la ANMAC perjudica a los usuarios, a los Clubs, a la industria y a esta asociación.

En lo que aquí interesa, toda persona que quiera tener un arma de fuego para la caza sustentable o el tiro al blanco; por razones de seguridad (sea una empresa que presta esos servicios sea un particular) o para coleccionarlas, necesita obtener la llamada Credencial de Legítimo Usuario. Sin ella, no puede acceder legalmente a su adquisición o transferencia ni puede mantenerse en su tenencia.

Esa credencial desempeña una función, en un sentido, semejante a la del Registro de Conducir: Un individuo, sin Registro, no puede usar un vehículo. Una

² La credencial de legítimo Usuario fue creada por ley 24.492: ARTICULO 1° — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acredite su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.

persona, sin Credencial de Legítimo Usuario, no puede concluir su adquisición o transferencia, no puede tenerla, usarla ni portarla.

Este certificado era expedido hasta época reciente por el Registro Nacional de Armas (en adelante, RENAR), pero ese organismo fue disuelto por la ley 27.192, que lo reemplazó por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (en adelante, ANMAC).

Actualmente, a partir del nuevo sistema creado por la ANMAC, **la expedición de Certificados de Legítimo Usuario –sujeta a disposiciones inconstitucionales– está virtualmente paralizada, y el comercio o los actos en derredor de la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego, sea para caza u otros usos deportivos, por razones de seguridad o para colección y las actividades deportivas conexas, es prácticamente nulo.** Lo que motiva esa parálisis virtual es el Certificado Psicofísico obligatorio que se exige a los postulantes, cuya obtención sólo puede lograrse previo pago de una onerosa tarifa a una empresa privada concesionaria del servicio, inidónea y desbordada por la situación. Ello, sin perjuicio de otras tasas y costos de gestoría.

A modo de ejemplo, como se informó previamente, AICACYP gestiona la obtención de la credencial. Antes de la regulación actual, manejaba un volumen de 700 a 800 credenciales por mes. Actualmente, no supera las ochenta. Idéntica merma, rayana con la parálisis, se verifica en la información que nos llega desde los clubs y/o comercios de todas las zonas incluidas en esta primera etapa de la ejecución de la Resolución 23/2016 ANMAC.

Además, con los obstáculos que alza la reglamentación actual y el elevado costo de su obtención, en vez de promover que los usuarios estén a derecho y que los que no lo estén que lo hagan, se desincentiva la tenencia o portación regular, legal, de armas. Es posible que al tratarse de un trámite tan objetable, los usuarios no

renueven sus Credenciales y que los que deseen comprar armas, lo hagan por canales informales. Para aquellos que deseen estar a derecho, sólo lo logran sacrificando sus derechos constitucionales.

A mayor abundamiento, esta situación pone en riesgo cierto a la industria, al personal que de ella depende, al comercio y a las actividades de los usuarios de armas y a esta asociación. Si se entorpece, obstaculiza o anula la posibilidad de obtener la Credencial de Legítimo Usuario, disminuirá, previsiblemente, la actividad comercial (ya ha disminuido) y deportiva o esta se canalizará al margen de la ley. Es decir, se logrará, precisamente, lo que la ley quiere evitar. Ergo, la afectación irrazonable de los derechos de propiedad y de trabajar en industria lícita, tanto de usuarios como uno de los co-actores y afiliados a AICACYP, como de comerciantes, asociaciones vinculadas a la actividad y de AICACYP, y médicos, como uno de los co-actores, que entre sus actividades profesionales estuvo la de otorgar el Certificado psicofísico en cuestión, luce evidente (arts. 28, 17, 14 y 19 de la Constitución Nacional). Una vez explicado el procedimiento V.S. advertirá que también es evidente la violación de la intimidad de los usuarios (art. 19 de la Constitución Nacional) y de la libertad de trabajar de los profesionales de la medicina excluidos por el nuevo régimen (art. 14 de la Constitución Nacional). Me explico.

III. BREVE HISTORIA DEL ASUNTO

3.1. El Status de Legítimo Usuario en la Ley 20.429

La ley 13.945, del año 1950, reguló formalmente esta actividad. Allí se previó, entre otras disposiciones, que los actos que se refieren a las armas de uso civil correspondían a las jurisdicciones locales (art. 4º, segundo párrafo), la regulación de las armas de guerra y de las armas de uso civil pero en el comercio interjurisdiccional, quedaban en manos del Ministerio de Defensa (art. 4º, primer

párrafo). El decreto 26.028/51, por delegación del legislador, reguló de manera incompleta las materias delegadas.

El dato relevante de esta breve referencia estriba en que al menos una parte de la actividad, esto es, la relacionada con las armas de uso civil, quedaba en manos de las Provincias. Existía un mínimo respeto al federalismo.

Esta ley fue derogada en el año 1973 por el art. 48 de la ley 20.429.

Como manifesté anteriormente, acceder a la condición de Legítimo Usuario de armas de fuego es clave porque es lo que habilita la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego.

La ley 20.429/73, cuyas delegaciones caducaron por virtud de la ley 26.519, establecía:

“Art. 14. — Serán legítimos usuarios del material clasificado como arma de guerra:

...1° Las policías de seguridad... 2° Los miembros de las Fuerzas Armadas y los de las policías de seguridad, nacionales o provinciales... 3° Los pobladores de regiones que tengan escasa vigilancia policial y todo otro habitante a quien por razones de seguridad sea indispensable conceder esta franquicia...4° Los particulares que se dediquen a la caza mayor...5° Las asociaciones en que se practica el deporte de tiro 6° Los miembros de las asociaciones en las que se practique el deporte de tiro...7° Los tripulantes de los buques o demás embarcaciones de patente nacional o extranjera en aguas jurisdiccionales argentinas...8° Las instituciones oficiales y las privadas con personería Jurídica, bancarias y comerciales... La reglamentación establecerá para cada uno de los casos previstos en los incisos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° del presente artículo las condiciones y requisitos que deberán cumplimentar los usuarios para obtener el permiso de tenencia pertinente. El otorgamiento de permiso de tenencia no importará, en ningún caso, autorización para la portación de las armas que el mismo comprenda, que queda de tal modo prohibida.

Art. 29. — La adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil, serán fiscalizadas en la Capital Federal y demás lugares de jurisdicción federal, por la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina dentro de sus respectivas jurisdicciones, y en las provincias por las policías

locales, sin perjuicio de la supervisión del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°.

El régimen aplicable será el siguiente:

1° Sólo las personas mayores de edad podrán ser titulares de los actos previstos en la primera parte del presente artículo, con las formalidades que establecerá la reglamentación...”

El segundo párrafo del inciso 8° del art. 14 y el inciso 1° del art. 29, recién transcritos, **delegaban totalmente en el Ejecutivo la reglamentación del régimen al que se sometería la obtención del estatus de Legítimo Usuario**. Pero su administración y la expedición de las credenciales, en las Provincias, estaría a cargo de las policías locales³. Es decir que, en esta parte, seguía los lineamientos que se habían trazado en la ley anterior, con relación a las armas clasificadas como de uso civil.

Es cierto que para ese entonces, en la Argentina de los gobiernos de facto, existía una confusión entre qué se podía legislar, quién legislaba y quién reglamentaba las leyes, pues se trataba de actividades que dependían de la misma persona u órgano (el gobierno o junta militar de turno).

En términos actuales, no obstante, y recuperada la vigencia plena de la Constitución Nacional, las funciones legislativas y ejecutivas han vuelto a estar depositadas en órganos distintos y las materias a reglar están limitadas tanto por las garantías constitucionales cuanto por el federalismo.

Sin perjuicio de que dichas delegaciones, como sostuve, han caducado, **legislar sobre esa registración y habilitación de usuarios y sujetar la**

³ Art. 30. — Cumplidos los recaudos y formalidades que establezca la reglamentación para la adquisición del arma, el interesado deberá recabar de la autoridad local de fiscalización el pertinente certificado de tenencia.

El certificado de tenencia no autorizará en ningún caso la portación del arma a que se refiera, la cual únicamente se otorgará previo permiso, en los casos que con carácter excluyente esta ley o su reglamentación determinen

reglamentación de la ley íntegramente a lo que disponga el Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente, es doblemente inconstitucional.

3.2. Incompetencia del Congreso Nacional para legislar sobre los Usuarios y su registración – violencia al Federalismo

Por un lado, la primera dificultad constitucional con la que se enfrenta esta ley y todas las sucesivas, radica en la ausencia de atribuciones del Congreso de la Nación para **(i)** legislar para toda la Nación con relación a qué personas físicas o jurídicas y bajo qué condiciones están habilitadas para tener o portar armas de fuego, es decir, para ser sus Legítimos Usuarios (art. 14) y, **(ii)** delegar en el Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de la ley (art. 29), donde se caracterizarán las inhabilidades y los recaudos a cumplimentar, suponiendo, claro está, que esas delegaciones no hayan caducado.

Y decía que esta es la primera dificultad con la que se enfrenta esta ley, porque **no existe disposición constitucional alguna que atribuya al Congreso Nacional la facultad de legislar en esa área.** Consecuentemente, se trata de una atribución inherente al poder de policía de las Provincias (arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional) y a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129 de la Constitución Nacional).

El mejor y más simple ejemplo es, nuevamente, el del Registro o Licencia para conducir automotores o vehículos de transporte o carga, al que acudimos más arriba. En materia de tránsito son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes legislan en lo que hace al tránsito local y en lo referido a las exigencias, inhabilidades y otorgamiento (o rechazo) de las licencias para conducir. **Es decir que lo relacionado con la reglamentación de quiénes y bajo qué**

condiciones pueden ser Legítimos Usuarios de vehículos, está en manos de las autoridades provinciales o municipales.

Ejemplo semejante podría hallarse con relación a los diferentes registros de la propiedad inmueble, o de personas jurídicas, etc. Y ello, a pesar de que en estos casos, el Congreso de la Nación posee competencia expresa para legislar en materia de códigos (art. 75.12 C.N.), cosa que no ocurre con la actividad reglamentada por la ley 27.192.

Queda claro, entonces, que como ocurre con el Registro de Conducir o con los Registros de la Propiedad Inmueble, el Congreso Nacional *carece de atribuciones constitucionales para legislar sobre el uso* (tenencia o portación) de las armas de fuego. *Tampoco las tiene para delegar en el Poder Ejecutivo la reglamentación de esas habilitaciones.* Del mismo modo que ocurre con las Licencias de Conducir vehículos, ese poder reside en las Provincias o sus Municipalidades y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.3. Ausencia de Delegación Válida

Subsidiariamente, si se superara la falta de atribuciones del Congreso Nacional para legislar con relación a quiénes y bajo qué condiciones pueden ser reconocidos como Legítimos Usuarios y si hiciéramos caso omiso de la caducidad de las delegaciones que contiene, el otro inconveniente grave de la ley 20.429/73 consiste en que en ella **no se proporcionan las “bases”** dentro de las cuales el poder administrador debe desempeñarse en su actividad reglamentaria delegada (art. 76, Constitución Nacional) **ni el plazo de su ejercicio.**

La determinación de las “condiciones y los requisitos” (art. 14 inc. 8) o de las “formalidades” a imponer a los peticionantes (art. 29, inc. 1º) quedaban enteramente a su discreción y arbitrio. Y es evidente que tan necesarias son las “bases” o el

“marco” de la delegación y el plazo de su ejercicio que, con ese esquema legal, la reglamentación podía transformar las habilitaciones legales en letra muerta o en un extenso catálogo burocrático de incontables exigencias.

Adviértase que **en el esquema legal el legislador se limitaba a nombrar (inconstitucionalmente) a las personas físicas o jurídicas que podían ser consideradas Legítimos Usuarios** y que debían ser mayores de 21 años (arts. 14 y 29.1), **pero además –apropiándose de facultades provinciales o municipales- delegaba íntegramente en el Poder Ejecutivo la creación del régimen jurídico al cual esas personas debían someterse** para obtener el certificado o licencia (que luego fiscalizarían las provincias).

Debo destacar que ese régimen jurídico que se delegó en el Ejecutivo y que éste creó, no es algo menor dentro de la economía de la ley. En realidad, su definición es tan importante como las demás que contiene la ley. Se trata, nada más y nada menos, que de establecer bajo qué circunstancias las personas que se designan en la ley pueden tener, portar y comercializar armas, municiones y explosivos. Es decir, se trata de regular la faz práctica del asunto, sin la cual no se pueden vender o comprar municiones o armas, usarlas, tenerlas y portarlas. La ley no puede entregar dicha tarea a un ente descentralizado, sin dotarlo de políticas, objetivos y límites concretos (art. 76 C.N.).

Si V.S. coincide con lo anterior, coincidirá también en que **semejante delegación presupone la renuncia a hacer la ley en un aspecto clave que –si por hipótesis, se admitiera que el Congreso puede legislar válidamente en estas cuestiones- no puede ser delegado, sin siquiera proporcionar pautas mínimas relacionadas con la capacidad o incapacidad de los usuarios y el plazo de su ejercicio, como manda actualmente el art. 76 de la Constitución Nacional.**

Finalmente, como he advertido en los párrafos antecedentes, las delegaciones contenidas en la ley caducaron por virtud de la Cláusula Transitoria Octava de la reforma constitucional de 1994. En efecto, luego del 24 de agosto de 2010 caducaron todas las prórrogas habidas con relación a la legislación delegada, como consecuencia de lo dispuesto la ley 26.519. Por lo cual dichas delegaciones dejaron de tener vigencia desde entonces.

3.4. Reglamentación de la ley 20.429/73

Unos años más tarde, el Poder Ejecutivo de la Nación reglamentó la ley 20.429/73.

En lo que aquí interesa, a través de los arts. 54 a 56 del **decreto del PEN N° 395/75**, el Poder Ejecutivo detalló los requisitos que debían satisfacer los postulantes para acceder a la calidad de Legítimo Usuario de armas de fuego. Dispuso, entre otras exigencias, las siguientes:

“ARTICULO 54.- Las autorizaciones de adquisición y tenencia para los legítimos usuarios comprendidos por el artículo 53 de la presente reglamentación, con la única excepción prevista por sus incisos 1 y 2, serán extendidas por el Registro Nacional de Armas.

“ARTICULO 55.- Se exigirán como condiciones generales a los legítimos usuarios comprendidos por los incisos 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 del artículo 53 de la presente reglamentación:

1) Ser mayor de 21 años.

2) No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego. Cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado médico.

3) Acreditar ante la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos. Esta emitirá certificación al respecto así como de la no existencia de antecedentes policiales o penales e imprimirá un juego de fichas dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas.”

ARTICULO 56.- *Se exigirán además, como condiciones especiales:*

1) Para pobladores de regiones con escasa vigilancia policial: Certificación por la policía del lugar de residencia, conformada por la autoridad policial superior, de las razones existentes para el otorgamiento de la autorización de tenencia.

2) Para otras personas: Se exigirá el mismo recaudo previsto en el inciso anterior. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Defensa, podrá, por resolución, dispensar total o parcialmente su cumplimiento como así el de las condiciones generales previstas por el artículo 55 de la presente reglamentación, sustituyéndolas o no por otras, cuando se tratare de autoridades nacionales, provinciales, comunales o extranjeras residentes en el país.

3) Para miembros de asociaciones de tiro: Acreditar su condición de tal mediante certificación extendida por autoridad competente de asociación de tiro habilitada legalmente.

4) Para personal de embarcaciones, aeronaves, aeródromos y puertos: Certificación emitida por la autoridad competente que acredite la calidad invocada y justifique la necesidad de adquisición del material solicitado.

5) Instituciones: Junto con la solicitud de autorización, deberán elevar una nómina del personal que hará uso del material, consignando en la misma el número de credencial de legítimo usuario, de cada uno de los incluidos en ella.

Asimismo deberá producirse la información que determinará el Registro Nacional de Armas, a los fines de evaluar los fundamentos de la tenencia que se peticona...”

Como se puede apreciar y al margen de su inconstitucionalidad patente de los arts. 54 a 56, **la reglamentación introdujo una exigencia que no estaba en la ley:** reclamó, ambigualmente, que el peticionante no debía presentar “*anormalidades psíquicas o físicas que [lo] incapaciten... para la tenencia de armas de fuego*”. **Basta volver la vista a la ley 20.429/73 para confirmar el hecho que allí ni se menciona semejante incapacidad. Tampoco se la sugiere.**

Por otra parte, el requisito, cuya exigencia es facultativa para la Administración, es ambiguo porque no especifica qué se entiende por esas anormalidades a tales fines. Ergo, **el decreto reglamentario era inconstitucional no sólo porque el Poder Ejecutivo no podía reglamentar sobre las calidades de Legítimo Usuario sino porque, inducido a hacerlo por el legislador, introducía**

incapacidades que la ley no mencionaba. Es decir, la pieza reglamentaria no sólo era inválida a la luz del art. 76 C.N. sino que también, analizado a la luz del art. 99.2 de la C.N., también lo infringía pues introducía excepciones que no figuraban en la norma reglamentada.

Además, merced a dicha ambigüedad del decreto y de la ley, el ex RENAR era depositario de una discrecionalidad total tanto con relación a la decisión de qué iba a considerar el funcionario de turno como “*anormalidades psíquicas o físicas*”, cuanto si reclamaría la presentación de un certificado médico o no (art. 55, inc. 2, última parte). La Administración podía actuar a voluntad.

Años más tarde, en 1995 –estando ya vigente las reformas constitucionales del año 1994–, la ley 24.492 ratificó las exigencias de la ley 20.429 y del decreto 395/75 y de las Disposiciones que hubiera exigido el RENAR para la obtención de la condición de legítimo usuario. Por lo tanto, las inconstitucionalidades reprochadas a la ley 20.429 y su decreto reglamentario 395/75 y, eventualmente, las Disposiciones que fueran del RENAR (no se menciona ninguna) se trasladaban a la ley 24.492⁴. Desde ya que si se interpretara que esta ley sancionó una carta en blanco hacia el futuro a favor del RENAR (hoy ANMAC), su contradicción con los arts. 76 y 99, inc. 2 de la Ley Fundamental sería patente. No existiría ningún tipo de contención a las apetencias legislativas futuras del RENAR (hoy ANMAC) y no delegaría en el PEN sino en un organismo gubernamental que el art. 76 de la Constitución no menciona. Además, y a todo evento, también estaría escatimándole competencia reglamentaria al propio Poder Ejecutivo.

⁴ ARTICULO 2° — Para la obtención de la condición de legítimo usuario de armas —del tipo que fuere— deberán cumplimentarse los recaudos establecidos en la Ley 20.429, su decreto reglamentario 395/75, resoluciones ministeriales y disposiciones del Registro Nacional de Armas. A dicho efecto, así como para todo acto de registración en la fuente relativo a armas de fuego, se utilizarán indefectiblemente los formularios Ley 23.979, con el objeto de conformar el Banco Nacional Informatizado de Datos del Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Defensa. Atento a ello, todo requerimiento judicial en materia de armas, deberá ser oficiado al Registro Nacional de Armas

Posteriormente, en el año 2003, el ex RENAR avanzó un poco más en su afán legislativo. En esta oportunidad, dictó la **Disposición N° 50**, la que, referida al certificado médico, resolvió:

Art. 3° — A los fines de alcanzar la condición de Legítimo Usuario de Armas de Fuego, de Uso Civil o de Uso Civil Condicional, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

f) Acreditar la inexistencia de anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al solicitante para la tenencia de armas de fuego, mediante certificación expedida por profesional habilitado, con indicación de su matrícula profesional, dirección, teléfono, sello y firma del otorgante.

Esta **Disposición** reiteraba parcialmente la exigencia dispuesta por el anterior **Decreto del PEN N° 395/75** (“anormalidades psíquicas o físicas”), pero –sin competencia para ello y con violencia al art. 3, ley 19.549– **lo enmendaba, imponiendo como obligatorio lo que en el decreto era facultativo de la Administración**, esto es, la presentación de un certificado médico que acreditara la aptitud física del peticionario.

Aunque sea algo demasiado obvio queremos llamar la atención sobre el desaguisado que implica que a través de una **Disposición** de una repartición autárquica como era el ex RENAR, se pretenda modificar un **Decreto del Poder Ejecutivo**.

Unos años más adelante, el ex RENAR, derogó la Disposición 50/03 y volvió a modificar esta reglamentación por medio de la **Disposición 197/06**. Para esta época, invocando los arts. 76 y 99, inc. 1° de la Constitución Nacional –es decir, reconociendo que se ejercía competencia legislativa delegada–, por decreto 1023/06 (publicado el 10.08.06), el Poder Ejecutivo transfirió el ex RENAR, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Sin embargo, la ley no delegaba la posibilidad de variar el Ministerio dentro de cuya órbita actuaría el ex RENAR.

Claramente disponía que el RENAR actuaría bajo la órbita del Ministerio de Defensa (art. 43). También le transfirió al Ministerio del Interior las competencias que la ley 20.439 atribuía a Defensa⁵. Por el decreto 1024, se designó a Andrés Matías Meiszner al frente del ex RENAR.

En esta oportunidad, la Disposición 197/06 (publicada el 25.08.06) incorporó más requisitos a cumplir por los aspirantes a obtener la credencial de Legítimo Usuario. Dispuso que el peticionario debía cumplimentar lo siguiente:

5)... a) Examen psicológico o psiquiátrico: certificación médica emitida por profesional psicólogo o psiquiatra matriculado y habilitado en el que conste:

Lugar y fecha de emisión

Nombre, Apellido, domicilio y teléfono del profesional

Número de Matrícula Profesional y organismo que la expidió

Nombre y Apellido del solicitante

Número de DNI, LC o LE del examinado.

Certificación que el solicitante se encuentra psicológica o psiquiátricamente apto para la tenencia de armas de fuego.

Firma y Sello del profesional.

b) Examen físico: certificación de examen físico emitido por profesional médico matriculado y habilitado, donde conste:

Lugar y fecha de emisión

Nombre, Apellido, domicilio y teléfono del profesional

Número de Matrícula Profesional y organismo que la expidió

Nombre y Apellido del examinado

Número de documento de identidad del examinado (DNI, LC o LE).

Certificación que el solicitante se encuentra físicamente apto para la tenencia de armas de fuego

Firma y Sello del profesional.

A los efectos de conformar un Registro de profesionales Médicos matriculados y habilitados, se celebrarán los convenios pertinentes con los correspondientes colegios habilitantes.

⁵ Decreto 1023/2006, Art. 4° — El MINISTERIO DEL INTERIOR ejercerá todas aquellas atribuciones que le fueron otorgadas por distintas normas al MINISTERIO DE DEFENSA, a fin de cumplimentar las Leyes Nros. 20.429 y 12.709 sus modificatorias y complementarias, en lo vinculado con el registro, habilitación, fiscalización y supervisión que establece la legislación vigente en materia de armas, pólvoras, explosivos y afines y para el desarrollo de las competencias asignadas al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (RENAR). Asimismo, autorízase al MINISTERIO DEL INTERIOR a celebrar contrataciones bajo el régimen de la Ley N° 23.283, a fin de propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la infraestructura y métodos operativos del REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

La documentación para la acreditación de este requisito será considerada válida al momento de su presentación cuando su fecha de emisión no haya superado los sesenta (60) días corridos⁶.

El Registro mencionado nunca se creó y los convenios a los que se alude en el penúltimo párrafo, nunca se celebraron. Por lo que los profesionales allí referidos actuaban independientemente y, en los casos que consideraban que correspondía, expedían los certificados a los usuarios que así lo solicitaban.

Obviamente, esta nueva Disposición adolecía de los mismos inconvenientes constitucionales y legales que la antecesora N° 50/06, a saber: **una Disposición de un ente autárquico no podía modificar lo establecido en un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación (art. 3°, ley 19.549); no podía legislar en esta materia (reservada a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires) y, si se interpretara que actuaba por delegación en base a los arts. 14 y 29 de la ley 20.429/73, esa competencia delegada (i) o se basaba en una ley cuyas delegaciones habían caducado, o (ii) se basaba en una ley que carecía de las contenciones que menciona el art. 76 de la Constitución Nacional.**

Es más. Es evidente que luego de la reforma constitucional del año 1994, toda delegación, eventualmente, debe recaer en el Poder Ejecutivo. Un ente autárquico no podía ser considerado como sujeto delegado; Y MUCHO MENOS DELEGADO PARA HACER, REALMENTE, LA LEY.

Por último, por las razones expresadas *supra* ap. 3.3, todas las delegaciones recién mencionadas también caducaron a partir del 24 de agosto de 2010.

IV. LA APARICIÓN DE LA ANMAC SUSTITUYENDO AL RENAR

En el año 2015 se sancionó la ley 27.192 que creó la ANMAC. Se trata de un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La

⁶ Esta Disposición del ex RENAR cita, como normas habilitantes de su dictado, lo dispuesto en las leyes 20.429, 24.492, los Decretos 3975/75, 252/94, 821/96, 1023/06 y 1024/06 y “*demás normativa de aplicación*”. Sin embargo, insisto, la delegación que la ley 20.429 realizaba era en el Poder Ejecutivo, no en el ex RENAR.

ANMAC reemplazó al RENAR y la totalidad de los bienes, presupuesto vigente, activos, patrimonio, personal y procesos de selección en trámite del actual RENAR, pasaron a la ANMAC (art. 27). Se trata de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo pues su Director Ejecutivo –“con rango y jerarquía de Secretario de Estado” según el art. 12 de la ley- es designado por el Presidente de la Nación y puede ser removido por éste a voluntad (la ley no prevé alguna forma especial de designación ni de remoción). La ley tampoco contiene previsiones legales tendientes a resguardar la independencia técnica y funcional del ente.

Una vez que el PEN designó a la flamante Directora Ejecutiva de la ANMAC, ésta **–sin habilitación legal delegada expresa– y sin convocar a audiencia pública**, modificó radicalmente el sistema vigente hasta entonces, fuera por aplicación de Leyes, Decretos o Disposiciones.

A partir de ahora, los certificados de aptitud psicológica y física que antes expedían un clínico y un psiquiatra o psicólogo elegido por el usuario, debe ser extendido –a cambio de una erogación abultada y desproporcional– por una empresa privada, a la que se le concedió el monopolio de dicha actividad, en todo el territorio nacional.

Es decir, desde un punto de vista pragmático y realista, la Directora Ejecutiva de la ANMAC creó un muy buen negocio para una empresa particular y paralelamente, destruyó un servicio público que funcionaba de manera aceptable, a pesar de los defectos constitucionales que traía de arrastre.

Estas disposiciones también están destruyendo económicamente a las firmas del sector, dadoras de trabajo en todo el país y a todos a los usuarios, quienes –ante la parálisis actual– ven impedida la posibilidad de renovar credenciales de Legítimo Usuario, lo que les dificulta o imposibilita desarrollar su actividad. Afecta también a miles de profesionales de la medicina que antes expedían los certificados. Todo ello tiene un efecto “cascada”, porque a medida que se van produciendo los vencimientos de los certificados de Legítimo Usuario, sus titulares no pueden renovarlos, lo que los coloca automáticamente en infracción. Lo mismo ocurre con quienes pretenden obtenerla por primera vez. Semejante situación, como imaginará V.S. sin mayor

esfuerzo, favorece a la postre al mercado negro de armas, fin que la ley 27.192 se proponía erradicar. Mucha gente que estaba registrada no renovará su Credencial y los que nunca la obtuvieron se verán en la disyuntiva de adquirir armas en el mercado negro o someterse a estas normas inconstitucionales.

Volviendo a la ley 27.192, es importante advertir que ella **no se refiere in terminis a la Credencial de Legítimo Usuario; ni siquiera la menciona.**

Tampoco alude a algún tipo de revisión psicofísica de los usuarios de armas, a fin de obtener la credencial de Legítimo Usuario.

Menos aún expresa que ese examen debe realizarlo, monopólicamente, una empresa privada.

Tampoco habla de reemplazar al RENAR por otro ente.

No obstante ello, la ANMAC modificó uno de los recaudos exigidos por las Disposiciones anteriores, referido a la aptitud psicofísica. Así, la Resolución ANMAC 23/2016 **creó, sin habilitación legal para ello**, el “*Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos*”. Conforme manda su art. 1º:

“Apruébese como Anexo I⁷ los lineamientos mínimos del sistema, supeditándose su complementación al proceso de selección, la aprobación del pliego pertinente y la normativa necesaria para su implementación”.

Conforme se anuncia en el Anexo I, el certificado psicofísico necesario, junto con otros recaudos, para obtener la condición de Legítimo Usuario, **ahora sería expedido exclusivamente por una entidad privada**, cuya selección dependería de una licitación.

Como consecuencia de esta norma, la ANMAC llamó a dicho concurso al que concurrieron tres oferentes. Dos de ellos fueron desestimados en la apertura de la oferta técnica (no hemos podido averiguar por qué ocurrió esa desestimación) y el servicio se adjudicó a la empresa Dienst Consulting S.A. Luego de algunas postergaciones, La ANMAC aprobó el costo del certificado de aptitud psicofísica

⁷ El Anexo I establece una serie de requisitos que debe satisfacer el prestador.

propuesto por Dienst Consulting S.A., que ascendió al exorbitante monto de \$ 4.500,00. Más tarde, fue reducido a \$ 3.500. A ello, deben sumarse otros costos fiscales.

El valor, en sí mismo, es tan ridículamente alto que **¡resulta ser más del 50% que el costo del examen psicofísico para ser piloto de avión!** Es así V.S. En la página del INMAE (Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial) se informa que **el costo actual de la certificación médica aeronáutica es de \$ 2.100,48**, al mes de marzo de 2017 (ver <http://www.inmae-cmae.com.ar/Home.php>).

Debe resaltarse que, con anterioridad a esta modificación existía la obligación de presentar certificados médicos que acreditaran la condición física y psíquica del postulante. No obstante, en muchos casos, el usuario no tenía que afrontar un costo específico para obtenerlos, porque ellos eran atendidos por los profesionales médicos de sus Obras Sociales o los sistemas privados de Salud. Cuando ello no era así, el costo no superaba los \$ 700. **Como advertirá V.S. el irrazonable encarecimiento del servicio entre la situación anterior y la actual o, inclusive, comparado su costo con el del examen psicofísico de los pilotos aeronáuticos, es ostensible.** El incremento es enorme (y el negocio también, si se lo mide por la cantidad de credenciales al año que esta actividad mueve).

V. INCONSTITUCIONALIDADES INSANABLES DE LA LEY 27.192

5.1. Subsunción Normativa

A esta altura es conveniente no distraer a V.S. con el análisis de múltiples irregularidades que rodean a la adjudicataria de la licitación y volver la mirada sobre la ley. No está en discusión aquí la plausibilidad mayor, menor o ninguna de las disposiciones controvertidas. Importa si el Congreso Nacional, es decir, si los representantes del pueblo, han adoptado las decisiones que la Constitución pone en su cabeza y, en caso afirmativo, si ellas se ajustan a los límites que la Carta Magna les impone. Veamos.

Los arts. 4° y 5° de la ley 27.192 encomiendan a la ANMAC, con generalidad que abruma, la consecución de los siguientes objetivos y atribuciones:

Art. 4, inc. 1°) “*el desarrollo de políticas de registración, **control** y fiscalización sobre los materiales, los actos y **las personas físicas** y jurídicas, conforme las leyes 12.709, 20.429, 24.492, 25.938, 26.216, sus complementarias y modificatorias.*”

ARTÍCULO 5° — Funciones y atribuciones. Serán funciones y atribuciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados:

1. Registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas.

Si se analizan ahora los textos recién transcritos, pronto se advierte que estamos ante una delegación absoluta, genérica, de hacer la ley. Decir lo que se expresa en la ley o decir “*hagan lo que les parezca*”, es la misma cosa.

La encomienda derivada a la ANMAC es de tal latitud que el legislador, más que delegar cuestiones de detalle, se ha desentendido del tema.

En efecto, la ley tan sólo recita atribuciones genéricas, abstracciones, sin limitación alguna, excepto con relación a las tarifas o aranceles.

Es más, el legislador no determina en la ley cuáles serían las “políticas de registración, control”, o a qué o quién van a registrar, qué límites existen a la registración con relación a la capacidad de las personas, etc., para que el nuevo ente dicte las regulaciones de detalle. En lugar de hacerlo, el legislador, lisa y llanamente, delega su definición íntegra a la ANMAC, ente que ni siquiera posee independencia frente al PEN: su Director Ejecutivo puede ser designado y despedido a voluntad por el Presidente.

En el punto en cuestión, **la nueva ley arrastra la misma vulnerabilidad constitucional que sus antecesoras, a saber:**

El Congreso Federal carece de competencia para legislar respecto de qué personas y bajo qué circunstancias pueden ser consideradas legítimas usuarias de armas de fuego.

Como expresé anteriormente, el art. 75 de la Ley Fundamental no le confiere atribución al Congreso para legislar con relación a qué personas y bajo qué circunstancias ellas pueden usar, tener y portar armas de fuego. Tampoco lo habilita para legislar sobre armas de fuego (ver *supra*, Cap. II.2.2). Éstas – como todas las que no se designan expresamente o por implicancia- son materias que las Provincias se han reservado para sí, al no haberlas deferido al legislador nacional (arts. 121 y 122 de la Constitución). Lo mismo puede decirse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129, Constitución Nacional).

Subsidiariamente, si se desechara esa razón y si el texto fuera examinado como si se tratara de una delegación regida por el art. 76 de la Constitución, él no reúne los recaudos que esa norma impone.

En primer lugar, la delegación operaría sobre la ANMAC y no sobre el Poder Ejecutivo, aspecto que, como se dijo, está vedado por el texto del artículo 76 de la Constitución Nacional (ver *supra* II.2.3)⁸. Como sostiene Gelli: “*A... tenor del art. 76 –en los casos de excepción previstos– sólo cabe la delegación en el presidente de la Nación.*”⁹

En segundo lugar, la delegación carece de bases y de plazo y, como se dijo en “*Colegio de Abogados*” (Fallos: 333: 2406): “*1º) la delegación sin bases, está prohibida...*”

⁸ Así surge del art. 2.G de la ley 24.309. Por ello es que los decretos delegados deben llevar la firma del Presidente y el refrendo del Jefe de Gabinete (art. 99, inc. 3 C.N.)

⁹ GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, ed. La Ley 2009, Tº II p. 268. *Idem*, BIDART CAMPOS; G.J., Tratado Elem. de Der. Constitucional Arg., Ediar 1995, Tº VI, p. 345; BALBÍN, C., Reglamentos Delegados y de Nec. y Urg., La Ley 2004, p. 308-312; SAGÜÉS, N.P., Manual de D. Constitucional, Astrea 2007, p. 384; GORDILLO, A., Tratado de D. Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, 10ª. ed. 2009, Tº I, p. VII-38; CASSAGNE, J.C., Curso de D. Administrativo, 11ª. ed. L.L. 2016, Tº I, p. 331, y muchos otros.

Si dichas objeciones fueran superadas y si se realizara un examen en particular, considerando que se ha creado un ente al que se dotó de ciertas facultades, es evidente que esa imputación de atribuciones no puede implicar una renuncia del Congreso a legislar, delegando en forma amplia sus facultades constitucionales. La violación del principio de legalidad sería ostensible.

La delegación, como dice el mismo art. 76, es una competencia excepcional, no ordinaria, que exige ciertas precisiones, justamente, por su carácter excepcional. Por lo que la creación de un ente al que se dota de una competencia legislativa imprecisa y amplia, a quien se le otorga algo así como un “cheque en blanco”, jamás resistiría su confrontación con la Constitución.

¿Cómo podría el Congreso delegar en un ente descentralizado una competencia que él mismo carece? O, suponiendo que tuviera parcialmente competencia:

¿Cómo podría delegarla íntegramente en un ente descentralizado?

Así como el Congreso no puede renunciar a legislar delegando esa función en el Ejecutivo, mucho menos puede hacerlo en una entidad autárquica creada dentro de la órbita del Presidente y dependiente de éste. Consentir tal proceder implicaría admitir una forma fácil y ostensible de burlar la prohibición constitucional. **Nos hallaríamos ante un modo de eludir indirectamente lo que la Constitución prohíbe hacer de manera directa en el art. 76** y que se apoya, fundamentalmente, en la división de poderes: es el Congreso quien está investido de atribuciones legislativas que sólo excepcional y condicionadamente puede delegar en el Ejecutivo. Se burlaría también otro de los propósitos perseguidos con la reforma constitucional de 1994, esto es, la atenuación del presidencialismo.

Lo mismo, *mutatis mutandi*, corresponde reiterar cuando se crea un ente que carece de independencia del Ejecutivo, al que se delega función legislativa. En efecto, en el caso que nos ocupa, es evidente que la ley no ha establecido una base clara o política o marco sobre la cual la ANMAC debería proceder. Es evidente que el recitado de un nutrido catálogo de acciones genéricas jamás puede considerarse como bases que le dan un marco a una delegación legislativa. De hecho, **tanta es la delegación que defiere en la ANMAC, que inclusive le encomienda la definición**

misma de qué políticas instrumentar¹⁰. Es decir que si la ley no indica claramente “las políticas”, quien al final del día hará la ley es la ANMAC y no el Congreso.

Mucho menos existe esa base o política legislativa, si particularizamos en los recaudos a exigir a los fines de obtener la Credencial de Legítimo Usuario, la que, como se dijo, ni se la menciona.

En efecto, adviértase que la ley encomienda a este organismo la satisfacción de un objetivo, a saber: “*el desarrollo de políticas de registración, **control** y fiscalización sobre los materiales, los actos y **las personas físicas y jurídicas**, conforme las leyes 12.709, 20.429, 24.492, 25.938, 26.216*. En realidad, es complicado definir expresiones tales como “políticas de registración” o “políticas de control”. Se trata de expresiones de tal vastedad que se hace imposible definir las y mucho menos limitarlas. Menos aún puede pensarse que esas expresiones constituyen un límite.

Más allá de esa dificultad, está fuera de discusión que es el Congreso quien debía definir mínimamente esas políticas y nunca entregar íntegramente esa función a un ente descentralizado del Poder Ejecutivo que, además, carece de independencia funcional del PEN.

Si esta delegación, constitucionalmente no puede ser hecha en el caso de una delegación en el Presidente, mucho menos cabe respecto de un ente como la ANMAC.

Aún pasando por alto tamaña abdicación, **la encomienda es de tal vastedad, que, en realidad, como dije anteriormente, esta Agencia puede hacer todo lo que le parezca conveniente. Es ella la que va a hacer la ley y, para peor, la ley no le impone límite o contención alguna. No hay bandas ni prohibiciones**¹¹. El único

¹⁰ “ARTÍCULO 4° — Objetivos. Serán objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados: **1.** El desarrollo de políticas de registración, control y fiscalización sobre los materiales, los actos y las personas físicas y jurídicas, conforme las leyes 12.709, 20.429, 24.492, 25.938, 26.216, sus complementarias y modificatorias. **2.** El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública. **3.** El desarrollo de políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados en el marco de las leyes 20.429, 25.938 y 26.216...”

¹¹ El art. 8, ley 27.192 expresa vagamente: “*Aranceles y tasas. La Agencia Nacional de Materiales Controlados establecerá aranceles y tasas equitativas para atender los servicios administrativos y*

límite que contiene la ley, bien que extremadamente vago, es el referido a que las tasas que se cobre a los usuarios, deben ser “equitativas” (art. 8, ley 27.192, pero una disposición tal es demostración que el Congreso **renuncia a legislar**.

5.2. Sobre la inconstitucionalidad de la Tasa a abonar a la Concesionaria

Un ejercicio de poder legislativo semejante al aquí objetado (conjuntamente con su legislación delegada) fue declarado inconstitucional por la Sala I de la Excma. Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal en autos “*Agroinvesta S.A. c/Estado Nacional*”, respecto de tasas que cobraba la I.G.J. con soporte en el art. 59 de la ley 25.237 (L.L., 2002-E, p. 74).

Según la Sala I, “*al disponerse [en el art. 59 de la ley 25.237] simplemente que el jefe de Gabinete fijará los valores o en su caso escalas a aplicar de la alícuota de la tasa, no se señalan pautas que permitan establecer las bases o límites dentro de cuyo marco se fijarían y que, cuanto menos, puedan entenderse como criterios legales válidos para permitir la delegación en materia tributaria en el caso, y en el marco insoslayable de la preceptiva constitucional y los precedentes de nuestro Alto Tribunal y del Fuero.*” (Considerando 12).

Ha dicho la Corte Suprema, refiriéndose a las delegaciones en el Poder Ejecutivo, extensibles a mi ver, a una Agencia que funciona dentro de la órbita de uno de sus Ministerios, que el Congreso puede otorgar al PEN atribuciones especiales para dictar reglamentos delegados **siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida, cosa que –como surge de la lectura de los arts. 4 , 5 y 8 de la ley 27.192– no ocurre en el presente caso.**

técnicos que deba prestar de conformidad a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación”).

Del mismo modo, no resultaría suficiente invocar una ley genérica o poco específica como la 27.192 para justificar que la subdelegación se encuentra permitida, **dado que el instituto de la delegación es de interpretación restrictiva, tanto cuando ocurre entre órganos de la administración (artículo 3° de la ley 19.549), “como cuando se trata de delegación de facultades de un Poder del Estado a otros, en particular, cuando se delegan facultades legislativas en órganos del Poder Ejecutivo, en tanto se está haciendo excepción a los principios constitucionales de legalidad y división de poderes”** (ver Fallos: 335: 1227) (2012).

Queda en claro, pues, que los arts. 4, 5 y 8 de la ley 27.192 violan los arts. 121, 122, 77, 76 y concordantes de la Constitución Nacional.

5.3. Otras Modificaciones Específicas de la ley 27.192 que no Resisten el Análisis Constitucional

En consonancia con lo dicho por la Corte Suprema, insisto en ello, basta observar la ley para advertir que de su lectura es imposible inferir que a la ANMAC se la había habilitado en “determinadas” cuestiones de administración. Nada en la ley permite inferir que el legislador le encomendó o tenía en claro que la ANMAC procedería a:

1. Derogar el régimen vigente para obtener la Credencial de Legítimo Usuario. Recuérdese que la ley 27.192 nada dice de esta Credencial. Ella recién apareció en 1995 con la sanción de la ley 24.492, que la creó¹². A su vez, las condiciones para su expedición estaban registradas en la ley 20.429 y en su decreto reglamentario, las que luego fueron modificadas (inconstitucionalmente) por sendas Disposiciones del RENAR (50/03 y 197/06, ver *supra* Cap. II.2.4). Es decir que – más allá de las caducidades de las delegaciones a que he hecho referencia-, en un solo acto, una Disposición de la ANMAC pretende modificar inconstitucionalmente

¹² ARTICULO 1° — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acredite su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.

normas de rango superior, como son la ley 24.492/73 y su decreto reglamentario 395/75. Es decir, recae en el mismo vicio constitucional que las Disposiciones 50/03 y 197/06.

2. Implementar un nuevo régimen que regule la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario (art. 1, Resol. ANMAC 023/16), afectando el derecho de los usuarios, profesionales de la medicina y personas jurídicas a que su conducta, en caso de ser regulada, lo sea por una norma válida (arts. 19 y 28 de la Constitución Nacional).

3. Delegar en un único prestador privado para todo el país, es decir delegar monopólicamente, la expedición o rechazo del certificado psicofísico (certificado, ahora, unificado) que condiciona –junto con otros recaudos- la expedición de la Credencial (art. 3, Resol. ANMAC 023/16), con distorsión del mercado (art. 42 de la Constitución Nacional) y del derecho de los médicos a ejercer su profesión (art. 14 de la Constitución Nacional)..

4. Coartar la posibilidad de objetar la denegación del Certificado de Aptitud Psicofísica por parte del concesionario, al no prever algún modo de apelación de lo resuelto por ella. Obviamente, semejante cercenamiento violenta el derecho de defensa de los usuarios asociados a esta Asociación y los del co-actor (art. 18 de la Constitución Nacional) e impide el ejercicio de una tutela judicial efectiva (art. 25.1 CADH y art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948).

5. Delegar en un único prestador privado la confección del protocolo médico a satisfacer por los interesados en obtener el certificado. En efecto, el art. 4, Anexo I de la Resolución ANMaC 023/16) dispone:

“Certificado de Aptitud Física. El Certificado de aptitud psicofísica no está sujeto a un formato pre-establecido. Él lo elabora el concesionario en oportunidad de hacer la oferta en la licitación” (ver art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares) y no se dispone la publicidad de los profesionales que están autorizados para realizar esos trabajos ni sus antecedentes profesionales.

A causa de ello, el solicitante deberá someterse “a ciegas” a un/a profesional, en particular, a un/a psiquiatra o psicólogo/a, que no es de su confianza, y con quien deberá intercambiar información personal, sin saber con precisión qué tipo de datos o experiencia ese profesional puede indagar de su vida. Y convengamos que una cosa es intercambiar información y antecedentes con un/a médico/a clínico/a con el que uno trata habitualmente. Otra distinta lo es con un/a psicólogo/a o con un/a psiquiatra, especialista al que no suele concurrir masivamente la población y cuya consulta importa exteriorizar aspectos personalísimos de la vida de los individuos. Con relación al examen físico, tampoco existen menciones en la ley o en la reglamentación acerca de sus características. Todo ello transgrede el derecho a la intimidad, asegurado en el art. 19 de la Constitución Nacional.

6. Fijar de manera inconsulta, sin audiencia pública previa en la que participen los usuarios, las asociaciones de usuarios y las Provincias interesadas, las tasas por ese servicio público (art. 3, Anexo I, Resol. ANMAC 023/16), violando así el art. 42, último párrafo, de la Constitución Nacional, según como fue interpretado por la Corte Suprema en el Caso “C.I.P.E.S. c/Ministerio de Energía”, mencionado al inicio

7. Establecer esa tasa –asumiendo que pudiera hacerlo, cosa que negamos- en un valor que –en contra de lo dispuesto por el art. 8 de la ley 27.192 y 28 de la Constitución Nacional– es, inequitativo, irrazonable y desproporcionado, 650% superior que lo que en promedio se venía abonando hasta el presente¹³. Como se dijo *supra* (Cap. IV, antepenúltimo párrafo), no puede ser, es lisa y llanamente ridículo que un psicofísico para tener o portar un arma sea 60% más oneroso que uno para pilotear un avión. Realmente, esto no resiste el menor análisis.

Piénsese que a los \$ 3.500,00 deben añadirse las siguientes tasas:

- Formulario presentación \$ 800,00
- Certificado de Antecedentes penales: normal (5 días hábiles) \$ 70 – Urgente 24 hs \$180 – Urgente 6 hs \$300 – Express 1 hora \$500 - El usuario lo paga directamente al Registro de Reincidencia.

¹³ ARTÍCULO 8° — Aranceles y tasas. La Agencia Nacional de Materiales Controlados establecerá aranceles y tasas equitativas para atender los servicios administrativos y técnicos que deba prestar de conformidad a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

- Certificado de Idoneidad de tiro: Libre competencia entre Instructores de Tiro y Entidades de Tiro. Hay quienes cobran \$ 1.000/1.200 (renovación) \$ 1.200/1500 (nueva Credencial).
- A todo ello, hay que agregar los costos de gestoría que son variables, pero nunca inferiores a \$ 1.000,00.

8. La ANMAC Creó ilegalmente un Registro de No Calificados Psicofísicamente (art. 5, Resol. ANMAC 023/16)¹⁴, que violenta el derecho a la intimidad de los postulantes (art. 19, Constitución Nacional), los arts. 5, 6 y 7 de la ley 25.326 y las disposiciones en materia de delegación legislativa para hacerlo (art. 76 de la C.N.) o en materia de reglamentación de la ley (art. 99.2 C.N.). En efecto, los postulantes a la obtención de la Credencial que concurren al Concesionario a realizarse ese examen no lo hacen voluntariamente –como cuando uno va a su médico (privado o de institución pública) – sino que va allí porque así lo impone la Resolución 23/16 de la ANMAC. No se lo anuncia previamente de la formación de ese registro ni de ninguna de las previsiones de los arts. 5 y 6, ley 25.326. No caben dudas entonces de que esa empresa concesionaria tendrá en su poder datos sensibles de los habitantes, que se relacionan con su salud física y psíquica, datos con los que luego la ANMAC formará un archivo, sin consentimiento de los usuarios. Es decir, los habitantes son obligados a que un desconocido obtenga esa información (información que, luego, clandestinamente, es derivada a la ANMAC), si aspiran a obtener la credencial. En una situación semejante, cobra también relevancia el hecho que la creación de ese registro no esté dispuesta expresamente en la ley 27.192. Pues, como dispone el art. ARTICULO 7° de la ley 25.326:

“1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.

2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley...”

Además, las Disposiciones de la ANMAC no prevén el derecho del postulante a que se lo elimine de esa lista (derecho de supresión), en caso de que esa calificación se revirtiera en un examen posterior. Dicho derecho está expresamente contemplado en la ley 25.326.

¹⁴ ARTICULO 5° — Créase el Registro de No Calificados Psicofísicamente para acceder a la condición de legítimo usuario, en el cual se asentarán los datos identificatorios de quienes hayan obtenido un certificado de NO apto emitido por el prestador seleccionado.

Como se puede colegir de su lectura, **es evidente que la ley 27.192 no establece la creación de ese registro ni la realización de esos exámenes por parte de un ente concesionado monopólicamente. En esa ley no consta base alguna dentro de la cual la ANMAC haya podido disponer todas estas nuevas exigencias entre las que se hallan incapacidades de las personas, violaciones al derecho de defensa de los usuarios, tarifas establecidas sin audiencia pública previa, violencia a la intimidad de los usuarios o postulantes, etc.** Al carecer la ley de bases no hay forma de controlar la conducta de la ANMAC. En realidad, la vaguedad de la ley es de tal latitud y la ausencia de bases tan manifiesta, que la hacen intolerable constitucionalmente.

Así, la inconstitucionalidad postulada precedentemente es consistente con lo manifestado por la Corte Suprema en Fallos: 331: 2406, en cuyo considerando 12 se lee que *“... la delegación sin bases está prohibida precisamente porque bloquea la posibilidad de controlar la conexión entre la delegación del Congreso y la actividad desplegada por la autoridad administrativa.”*

Refiriéndose al caso allí en examen, abundó:

“Así, por ser amplia e imprecisa, la delegación no confiere atribuciones más extensas, sino, al revés, a mayor imprecisión, menor alcance tendrá la competencia legislativa que podrá el Ejecutivo ejercer válidamente.”

Considero que en base a las pautas establecidas anteriormente, estas exigencias han sido dispuestas en transgresión al art. 76 y también en infracción a la división de poderes, que la Constitución asegura. Esas pautas, como mínimo, deben regir también la delegación legislativa cuando ella se realiza en un ente autárquico, porque si no –como expresé anteriormente- se lograría indirectamente lo que no se puede obtener directamente.

En base a lo expuesto, las disposiciones mencionadas, también transgreden el derecho de propiedad (art. 17 C.N.), de defensa (art. 18 C.N.), la razonabilidad (art. 28 C.N.) y la intimidad de los usuarios y postulantes (art. 19 C.N.), al tiempo que distorsiona la competencia (art. 42 C.N.), desde que una actividad que antes era realizada libremente por los profesionales médicos, médicos psiquiatras y psicólogos, fue entregada monopólicamente a un concesionario privado.

VI. IRRAZONABILIDAD DE LA REGULACIÓN

6.1. Introducción

Si V.S. recorre el articulado de la ley 27.192 advertirá que en ninguno de sus preceptos se atribuye a la ANMAC la potestad para crear un Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos, en manos privadas y bajo forma monopólica. La implementación de este giro copernicano paralizó el sistema. El prestador del servicio no poseía infraestructura propia como para hacerse cargo de todo el país. Tanto fue así, que la ANMAC se vio en la obligación de circunscribir el alcance de la reforma a la Capital Federal, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe¹⁵ y, aun así, estamos ante una virtual paralización en la expedición de Certificados.

Con el objeto de “excusar” la sanción de esta norma, la ANMAC citó, indiscriminadamente, casi toda la legislación anterior a la ley 27.192.

Conforme he expuesto precedentemente, la ley 20.429/73 se entrometió en materia reservada por las Provincias y delegó inconstitucionalmente en el Ejecutivo hacer la ley en todo lo referido al Certificado de Legítimo Usuario. Como consecuencia de esa delegación ilimitada a favor del Poder Ejecutivo, éste creó, de la nada, la exigencia relacionada con la “*inexistencia de anormalidades psicofísicas*”. Ésta fue luego “reelaborada” por el ex RENAR, ente que modificó lo dispuesto en el Decreto anterior, concluyendo en la obligación de presentar un certificado de aptitud psicológica y otro de aptitud física, del que ni se hablaba en la ley.

Pretender que esas regulaciones fueron fruto del poder reglamentario del Presidente también adolecería de inconstitucionalidad. Brevemente, fue la Administración quien creó esa exigencia. De ella ni se habla en la ley. Ergo, el Poder Ejecutivo no estaba “reglamentando” algo que pre-existía, rudimentariamente, en la ley. Es la reglamentación misma la que lo creaba y “legislaba”. Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo alteraba la letra de la ley con excepciones reglamentarias que ella no contenía. Como sostiene genérica y acertadamente Carlos Balbín: “*el decreto*

¹⁵ Resolución N° 54/17: “ARTÍCULO 1°.- Establézcase a partir del 15 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos.” ... “ARTÍCULO 4°.- Establézcase que lo dispuesto en los artículos precedentes será de aplicación a los trámites que ingresen en la Mesa de Entradas de la ANMAC en C.A.B.A y en las Delegaciones y Agencias Autorizadas en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

no puede restringir las situaciones favorables creadas por la ley o, en su caso, ampliar las situaciones que fueren desfavorables al limitar más un derecho o exigir otras cargas.” (Constitución de la Nación Argentina y Normas Complementarias. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial., dirigida por D. Sabsay y P. Manili, T° 4, p. 154). Y es obvio que al incorporarse este recaudo se oponía un obstáculo discrecional, que no constaba entre los demás recaudos que establecía la ley que supuestamente se estaba reglamentando.

La situación empeoró posteriormente, como relatamos antes –fuera que el Poder Ejecutivo ejerciera una competencia de que carecía o no– porque el ex RENAR, sin atribución constitucional ni legislativa, y violando el art. 3 de la ley 19549, modificó sucesivamente el decreto del Poder Ejecutivo N° 395/75, y comenzó a “legislar” libremente, por su cuenta.

Tal estado de cosas se agrava aún más, a partir de la ley 27.192.

En efecto, como indicamos, la ANMAC dispuso nuevas reglas que condicionan la adquisición del estatus de Legítimo Usuario. Por sí y ante sí, sustituyó la presentación de certificados médicos y creó un Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos, irrazonablemente costoso, en manos privadas y bajo forma monopólica.

De la ley no surge atribución alguna que autorice a la ANMAC a crear *ex nihilo* un costoso e ineficiente sistema monopólico para la expedición del certificado de aptitud psicofísica.

Tampoco puede decirse que se haya delegado en esta Agencia esa atribución que, dentro del marco que traza el art. 76 de la Constitución Nacional, la autorizara a crear un sistema monopólico como el aquí controvertido. **La ley nada dice al respecto.** Ella ni siquiera expresa, como hacía objetablemente la ley 20.429/73, que el Poder Ejecutivo iba a reglamentar las condiciones y los requisitos que deberían cumplimentar los usuarios.

A todo evento, si se argumentara que la reglamentación de la ley es una facultad inherente, bien que subordinada, del PEN, ello tampoco daría sustento a las reglas sancionadas por la ANMAC. En efecto, esa atribución reglamentaria, como

dice Gelli (citada más arriba), recae en el Poder Ejecutivo (art. 99, inc. 2, Constitución Nacional), no en la ANMAC.

Por lo demás, **asumiendo por hipótesis, que la ANMAC tuviera de algún modo esa competencia reglamentaria de la ley 27.192 –facultad que niego–, es evidente que el cambio de sistema es tan radical –creación de un monopolio en todo el territorio nacional– que, para no considerarla como una alteración de la ley, ésta debería haber dicho mínimamente algo sobre la creación de un nuevo sistema de certificaciones de salud de los usuarios.**

En esta materia existen antecedentes en ese sentido. En efecto, véase por ejemplo, lo ocurrido con la ley 23.979. Estando en juego la modernización de la infraestructura y de los métodos operativos del RENAR –es decir, algo semejante a lo que se alegó en el art. 1 de la Disposición 13/2016 de la ANMAC–, la ley 23.979 autorizó expresamente al Poder Ejecutivo para que, a su criterio, el Ministerio de Defensa pudiera *“celebrar, bajo el régimen de la Ley 23.283, contratación técnica y financiera, sin cargo alguno para el Estado nacional, con entidades públicas o privadas, a fin de propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la infraestructura y métodos operativos del Registro Nacional de Armas.”*

Sin embargo, ninguna autorización semejante dispuso la ley 27.192. Y no lo hizo porque el legislador jamás tuvo en mente que se reformara lo relacionado con el certificado de Legítimo Usuario¹⁶.

6.2. Las pseudo razones dadas por la ANMAC en favor del nuevo régimen

Si suponemos, por hipótesis, que la ANMAC está habilitada legislativa y constitucionalmente, para reglamentar esta actividad, una forma típica de analizar la razonabilidad de las normas por ella sancionadas consiste en determinar si el medio empleado en ellas tiene relación directa y substancial con el o los fines que se persigue. Así enseñaba históricamente Juan Francisco Linares en su famosa obra y así procedió la Corte en incontables oportunidades.

¹⁶ Si, por hipótesis, se aceptara que el legislador tenía competencia para ello, él podría haber decidido alterar el régimen de certificados médicos por otro. Pero si esa hubiera sido su decisión es obvio que en la ley estaría plasmada esa decisión o, como mínimo, esa política y las bases de la delegación.

Pues bien, a renglón seguido de las citas normativas al bulto que realiza la Resolución ANMAC 23/16 en el Visto, y refiriéndose en concreto a las revisiones psicofísicas, sostuvo la Directora en el considerando 11°:

“Que en este sentido, en lo que hace a la evaluación psicofísica del aspirante a la obtención de la credencial de legítimo usuario, en la actualidad es realizada por un médico particular, quien determina si el solicitante se encuentra o no apto para la tenencia de armas de fuego, utilizando a tales efectos un concepto amplio y librado a la consideración del criterio de cada profesional.”

Si uno se guía por el lenguaje empleado, a través del cual se destaca, desaprobatoriamente, que hasta entonces, quien emitía el certificado era “un médico particular”, concluiría que a partir de ahora, serían médicos pertenecientes a instituciones públicas en quienes se delegaría esa tarea, los que actuarían en base a un protocolo uniforme elaborado por la ANMAC o por algún organismo público especializado. Tal proceder no merecería reproche técnico pues, en general, las especialidades requeridas (clínico y psicólogo o psiquiatra) son cubiertas en todo el país por los hospitales públicos, nacionales o provinciales y por las Obras Sociales.

Con relación a la forma de eliminar “los criterios” de cada profesional médico que expedía el certificado –*fin* que también se persigue– la solución también parece fácil. Bastaba hacer lo que ahora hizo (y le pide a la adjudicataria que haga), esto es, crear un protocolo médico, según que se vaya a solicitar la calidad de Legítimo Usuario para tenencia o portación (Ver art. 4, Anexo I de la Resolución ANMAC 023/16 y Anexos I y II al contrato firmado entre la ANMAC y Dienst Consulting).

Es decir que, de acuerdo a lo visto hasta aquí, para eliminar a los médicos “particulares” que expedían certificados basados en “criterios variables” (*fin*es cuya eliminación procuraba la ANMAC) los *medios* adecuados eran (i) exigir que el certificado fuera expedido por profesionales de establecimientos sanitarios públicos, nacionales o provinciales, (ii) en base a un protocolo pre-establecido.

Sin embargo, no fue así. Irrazonablemente, inexplicablemente, la responsabilidad de esos controles, bajo forma de monopolio o exclusividad, se depositó en una empresa privada que posee un solo establecimiento propio en la ciudad de La Plata (Dienst Consulting, calle 1, n° 663, La Plata, PBA) y ningún otro establecimiento propio en el resto del país.

A continuación del párrafo transcripto, dijo la Directora de la ANMAC:

“Que por otra parte, este Organismo ha tomado conocimiento de causas judiciales en las que se encuentra cuestionada la veracidad de certificados psicofísicos presentados por los usuarios.”

A pesar de lo que allí se menciona, la ANMAC, una vez más, se expresa al bulto, genéricamente: no individualiza a qué causas judiciales se refiere, dónde tramitarían, cómo se caratularían los expedientes, su estado procesal, quiénes serían las personas imputadas y cuál habría sido el resultado, en caso de que se hubiera dictado sentencia. Tampoco informa a cuántos casos se estaría refiriendo. Es decir que se afirma la existencia de hechos que carecen de respaldo documental. Por lo tanto, no se puede saber si esos hechos son ciertos y, si los fueran, tampoco se puede saber de cuántos casos se trataría y qué personas estarían involucradas en qué carácter.

Esta serie de ausencias de fundamentación de esa afirmación consisten, parejamente, en sendas violaciones del art. 5, inc. 11 de la ley 27.192, pues la ANMAC está en la obligación específica de *“garantizar la publicidad de sus decisiones, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron tomadas y de las estadísticas producidas sobre la materia mediante su difusión en la página web del organismo, sin perjuicio de todas las vías de comunicación complementarias que puedan utilizarse.”*

En el párrafo siguiente, abundó:

“Que lo expuesto refuerza la necesidad de la implementación de parámetros precisos a los que deban ajustarse las certificaciones de aptitud psicofísica de quienes solicitan su inscripción como legítimos usuarios de armas de fuego, que permitan a este Organismo aseverar que el solicitante ha sido efectivamente evaluado por un profesional médico matriculado, en virtud de criterios uniformes y en un marco de absoluta profesionalidad, extremos éstos que en la actualidad carece por no ser ellos de su competencia específica.”

El párrafo precedente se refiere exclusivamente a las características de los exámenes psicofísicos. El párrafo padece de cierta inconsecuencia lógica, pues del hecho que se presuma que no existe uniformidad en la evaluación médica no se sigue, necesariamente, que ella debe hacerla una empresa privada, con carácter exclusivo o de monopolio. El salto lógico es evidente. Si el *fin* buscado es lograr esa uniformidad o evitar la disparidad de “criterios”, bastaba con exigir un protocolo

único a ser satisfecho por los médicos. Como se sostuvo recién, ese era el *medio* más ajustado a la consecución del *fin*.

Con relación al “marco de absoluta profesionalidad” al que también se aspiraría, es evidente que ese fin es muy ambiguo. No está claro a qué apunta. Puede conjeturarse que están en la búsqueda de alguna institución o instituciones que se caractericen por otorgar ese marco de absoluta profesionalidad. Pero, como el régimen debe cubrir todo el territorio es obvio que ese nivel de exigencia no se hallará en todas partes.

Lo que sí es seguro es que no se aprecia en el adjudicatario ninguna característica que lo eleve al rango solicitado. Se sabe de esta empresa que tiene sólo un establecimiento en la ciudad de La Plata (PBA) y que está vinculada a prestadoras médicas del sindicato o de la obra social de Camioneros. Pero –si lo que preocupa a la ANMAC es, según dice, “la *“veracidad de los certificados psicofísicos presentados”*”, entonces la profesionalidad de esa empresa y la veracidad de los certificados que emite está seriamente comprometida en la actualidad.

En efecto, esta empresa –a la que se relaciona con Hugo Moyano y Jorge Elías (ver nota de Diego Goldberg en el Periódico TRIBUNA de Periodistas, del 28.08.17, <https://periodicotribuna.com.ar/18210-el-macrismo-complicado-por-el-escandalo-de-dienst.html>)– tenía a su cargo el control de licencias médicas y realización de juntas médicas del personal docente y no docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Recordará V.S. la imputación que realizaron públicamente las autoridades provinciales debido a la abultada cantidad de licencias (17%) en esta área de la Educación. En dicha oportunidad y en medio extensísimos paros docentes, fue cuando se discutió la conveniencia del plus por “el presentismo”. Pues bien, el nivel de las denuncias administrativas y penales contra la empresa Dienst Consulting (la misma a la que se confirió la concesión de ese servicio aquí). Así lo informa el 31 de octubre de 2017 un cable de Telam que se adjunta en copia con esta presentación (<http://www.telam.com.ar/notas/201710/218160-provincia-de-buenos-aires->

gobierno-no-renovacion-contrato-empresa-medicina-licencias-docentes-maestros.html).

Es decir que, de estar al comportamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la denuncia del gremio Frente de Unidad Docente (FUD), la calidad “profesional” de la empresa no sólo ha sido puesta en duda sino que está bajo investigación administrativa y penal.

Ergo, se estaría poniendo en manos de una empresa con antecedentes de falsear revisiones médicas, la expedición de un certificado de aptitud psicofísica que habilitará a los postulantes, no ya para justificar ausencias a dar clase, sino para ser considerados Legítimos Usuarios de armas de fuego y sus municiones. En realidad, la sola mención de estos antecedentes produce escalofríos y avisa de la urgencia en detener este amañado proceso.

Seguidamente, añadió la Directora Ejecutiva:

“Que por todo lo expuesto, resulta imperioso crear un sistema, que introduzca adecuaciones que permitan optimizar los procedimientos de control y fiscalización efectuados por este Organismo al momento de emitir las correspondientes autorizaciones y el resguardo del riesgo creado por el uso, tenencia y manipulación de armas de fuego y demás materiales controlados por parte de los legítimos usuarios en todas sus categorías, como así también permita producir información estadística tendiente a concretar políticas públicas de prevención.”

En base a lo expuesto anteriormente, es evidente que la intervención de Dienst Consulting jamás puede “optimizar los procedimientos de control y fiscalización” para emitir las autorizaciones bajo estudio. La empresa carece, como mínimo, de la reputación necesaria para entregarle un servicio público.

Por último, quedaría por analizar por qué es conveniente entregar este servicio de manera monopólica, a un solo prestador o concesionario. Sin embargo, nuestro análisis quedará trunco: en los considerandos no se ha fundamentado esa necesidad.

En conclusión, a la luz del análisis precedente ha quedado demostrada la irrazonabilidad de los medios empleados por la ANMAC para procurar los fines que se propuso. Su Resolución 23/2016 transgrede el art. 28 de la Constitución Nacional.

VII. AUSENCIA DE AUDIENCIA PÚBLICA

Anteriormente nos hemos referido a que la tasa que se fijó para la obtención del certificado psicofísico carece de base legislativa. Además, alegamos que ella se estableció por la ANMAC por sí y ante sí. Pasemos ahora a su examen, a la luz de las disposiciones vigentes.

La reforma constitucional del año 1994 incorporó el artículo 42 que dice:

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Como se lee en el texto precedente y adelantamos en el Cap. V, esta nueva disposición constitucional se refiere a varias cuestiones que en el presente caso han sido ignoradas. Por ejemplo, si se considera que el Congreso es competente para regular todo lo relacionado con los usuarios de armas, incluyendo su habilitación como tales, las disposiciones y resoluciones de la ANMAC no han establecido una audiencia pública a celebrarse con anterioridad a la determinación del arancel o tasa. Tampoco fueron consultadas las asociaciones de usuarios (que son muy numerosas y están diseminadas por todo el país) ni, hasta donde se conoce, las Provincias.

El registro de armas y la expedición del certificado psicofísico que allana la obtención del certificado de Legítimo Usuario, es un servicio público que presta el

Estado, a través de la ANMAC. Los habitantes no se someten voluntariamente a este régimen sino que los que deseen tener armas legalmente, están obligados por la ley a tramitarlos. Ese servicio tiene costos. Entre ellos, el más oneroso que debe abonarse es el correspondiente al certificado psicofísico. Dicho costo representa un 650% del promedio que se abonaba antes de esta reglamentación, cuando el certificado era obtenido de un médico particular.

Pues bien, cuando se está ante aranceles o tarifas monopólicas no sólo no se defiende la competencia, como manda el art. 42 de la Constitución, sino que debe darse participación a los usuarios y consumidores y a las asociaciones de usuarios y consumidores y a las Provincias, previamente a su establecimiento. Como sostuvo la Corte Suprema en el caso "*Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad*", resuelto el pasado 18 de agosto de 2016:

18) Que en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio.

[...]

De la redacción del artículo 42 se desprende la clara intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y usuarios -expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente de un modo genérico- participen en la elaboración de ciertas disposiciones de alcance general a cargo de la Administración cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos (conf . doctrina de la disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni en Fallos: 329:4542). La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información "adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad

para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan. Ello es consistente con la noción de democracia deliberativa, porque los términos de la cooperación que propone son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación mutua. **En este sentido, el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia.** (Rawls, John, Justice as Fairness. A Restatement, Harvard, Harvard University Press, 2001) (del voto de Lorenzetti y Highton; *idem*, voto de Maqueda, considerando 15; *idem* Rosatti, considerando 15).

Queda en claro, que al disponer una tasa o tarifa de un servicio público sin convocar previamente a Audiencia previa de los usuarios, provincias y distintas expresiones deportivas y comerciales del sector, la ANMAC ha transgredido el art. 42 de la Constitución Nacional.

VIII. CONCLUSIÓN

Como ha quedado de manifiesto precedentemente, la ley 27.192, la Resolución ANMAC N° 23/2016 y la legislación y reglamentación concordante ofenden sendas garantías, derechos y atribuciones constitucionales. El Congreso Nacional no tiene competencia para reglar esta actividad y, si la tuviera, ha renunciado a legislar delegando íntegramente en la ANMAC esa atribución constitucional. Ésta, además, ha ordenado disposiciones irrazonables, desproporcionadas, desigualitarias, que afectan el derecho de defensa de los usuarios y de los médicos que realizaban el examen psicofísico.

IX. SOLICITA SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR

9.1. La Medida Solicitada

En vista de las razones expuestas a lo largo de esta presentación y dado que ellas, *prima facie* valoradas, son verosímiles, solicito se decrete una medida cautelar innovativa que suspenda la vigencia de la Resolución 23/2016 y concordantes de la ANMAC relacionadas con la obtención del certificado psicofísico. En su lugar, provisoriamente, hasta que se dicte sentencia definitiva y sin que esto implique renunciar a la invalidez de las normas cuestionadas, solicito se restablezca la vigencia del régimen anterior, según las Disposiciones 197/2006 y concordantes (ver texto *supra*...).

Una medida cautelar de estas características mantendría una relación de equilibrio entre los intereses de las partes. Pues (i) no perturbaría el normal funcionamiento del servicio. De hecho, el régimen del certificado psicofísico cuya reinstalación provisional se requiere es el mismo en base al cual se venía funcionando hasta el mes de agosto de presente año 2017. (ii) Resguardaría los derechos constitucionales de los usuarios, médicos y asociaciones vinculadas a la actividad que gestionan dicho certificado cuya violación se ha descrito en las páginas antecedentes.

9.2. Perjuicios

Con relación a los perjuicios que la Resolución 23/2016 y concordantes de la ANMAC está produciendo, tal como se ha referenciado a lo largo de esta presentación, ellos son múltiples y afectan tanto a los usuarios de armas, cuanto a los médicos, y a las asociaciones de usuarios, industriales y comerciantes del sector. Resumiendo, los derechos violentados, sus titulares y los perjuicios generados, pueden sintetizarse así:

- **Los actores tienen derecho a que su actividad, de estar regulada, lo sea por una ley válida, emanada de la autoridad con competencia para ello. La ley 27.192, las Resoluciones 23/2016, 54/2017 y concordantes de la ANMAC previamente consideradas poseen vicios que autorizan a predicar su inconstitucionalidad.** El Congreso Nacional no tiene atribuciones constitucionales, no puede legislar, en lo relacionado a quiénes

pueden ser titulares, tener o portar armas de fuego en cada Provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (ver *supra*, Cap II a V inclusive).

- **El examen psicofísico dispuesto por la ANMAC es muy oneroso.** Si a ello se añaden las tasas restantes (aprox. \$ 2.070,00 para renovación de Credencial o \$ 2.370,00 para Credencial de nuevo usuario) y los costos de gestoría, se llega a una suma aproximada superior a los \$ 5.500. Como expuse *supra* (Cap. V.5.3, punto 7), dichos aranceles violentan el art. 8 de la ley 27.192.
- **El arancel o tarifa a los que he hecho mención recién no fueron precedidos de la Audiencia pública** que manda el art. 42 de la Constitución Nacional, según como fue interpretada esa norma por la Corte Suprema (ver *supra*, Cap. VII).
- **La ley 27.192 no habilitó a la ANMAC para derogar el régimen vigente para obtener la Credencial de Legítimo Usuario.** Recuérdese que la ley 27.192 nada dice de la Credencial. Ella apareció en 1995 con la sanción de la ley 24.492, que la creó¹⁷. Las condiciones para su expedición estaban registradas en la ley 20.429 y en su decreto reglamentario 395/75, disposiciones delegantes que –más allá de su caducidad posterior- luego fueron modificadas (inconstitucionalmente) por sendas Disposiciones del RENAR (50/03 y 197/06, ver *supra* Cap. II.2.4). Es decir que, en un solo acto, una Disposición de la ANMAC pretende modificar inconstitucionalmente normas de rango superior, como son la ley 24.492/73 y su decreto reglamentario 395/75. Es decir, recae en el mismo vicio constitucional que las Disposiciones 50/03 y 197/06.
- **La ley 27.192 nada dice acerca de que la ANMAC podía implementar un nuevo régimen que regulara la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario** (art. 1, Resol. ANMaC 023/16). La conducta de la ANMAC afecta

¹⁷ ARTICULO 1º — Prohíbese la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acredite su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.

el derecho de los usuarios y personas jurídicas a que su conducta, en caso de ser regulada, lo sea por una norma válida (arts. 19 y 28 de la Constitución Nacional).

- **La ANMAC delegó en un único prestador privado para todo el país, es decir delegó monopólicamente, la expedición o rechazo del certificado psicofísico** (certificado, ahora, unificado) que condiciona –junto con otros recaudos- la expedición de la Credencial (art. 3, Resol. ANMAC 023/16), con distorsión del mercado (art. 42 de la Constitución Nacional) y afectando la libertad de trabajo de los profesionales de la medicina (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), uno de los cuales, es co-actor en esta causa.
- **Las Disposiciones de la ANMAC coartan la posibilidad de los usuarios de objetar la denegación del Certificado de Aptitud Psicofísica emitido por el concesionario, al no prever algún modo de apelación de lo resuelto por él.** Obviamente, semejante cercenamiento violenta el derecho de defensa de los usuarios asociados a esta Asociación y los del co-actor (art. 18 de la Constitución Nacional) e impide el ejercicio de una tutela judicial efectiva (art. 25.1 CADH y art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948). Ver *supra* Cap V.5.3, punto 4.
- **Las Disposiciones de la ANMAC Delegaron en un único prestador privado la confección del protocolo médico** a satisfacer –obligatoriamente- por los interesados en obtener el certificado psicofísico, con violencia del art. 19 de la Constitución Nacional.
- **La ANMAC estableció la tarifa o Arancel del Certificado Único Psicofísico en un valor que –en contra de lo dispuesto por el art. 8 de la ley 27.192 y 28 de la Constitución Nacional– es, inequitativo, irrazonable, 650% superior a lo que en promedio se venía abonando hasta el presente¹⁸.** También es irrazonable. Como se dijo *supra* (Cap. VI), no puede ser, es lisa y llanamente ridículo que un psicofísico para tener o portar un arma sea 60% más oneroso que uno para pilotear un avión. Realmente, esto no resiste el menor análisis.

¹⁸ ARTÍCULO 8° — Aranceles y tasas. La Agencia Nacional de Materiales Controlados establecerá aranceles y tasas equitativas para atender los servicios administrativos y técnicos que deba prestar de conformidad a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

- **La ANMAC Creó ilegalmente un Registro de No Calificados Psicofísicamente** (art. 5, Resol. ANMaC 023/16)¹⁹, que violenta el derecho a la intimidad de los postulantes (art. 19, Constitución Nacional), los arts. 5, 6 y 7 de la ley 25.326 y las disposiciones en materia de delegación legislativa para hacerlo (art. 76 de la C.N.) o en materia de reglamentación de la ley (art. 99.2 C.N.) (ver *supra* Cap. 5.3, punto 8).
- **El monto del examen psicofísico no sólo es irrazonablemente caro para un particular, sino que –en infracción a la reglamentación vigente– ni siquiera se permiten consultas personales y gratuitas, como exige la reglamentación.** En efecto, el vínculo con la prestadora del servicio es exclusivamente por internet y para obtener respuesta a cualquier consulta debe abonarse anticipadamente la tarifa. Aunque es algo de conocimiento público y notorio, las comunicaciones en la Argentina de hoy son de las más antiguas y lentas de Latinoamérica. Quizá ellas funcionan tolerablemente en los grandes centros urbanos, pero donde uno se aleja de ellos entre 12 y 14 km, la calidad se deteriora enormemente. Es casi imposible navegar por internet alejado de las antenas repetidoras o de las comunicaciones por cable. Además, por razones generacionales o de educación, mucha gente no se maneja diestramente con internet.
- Estas exigencias y obstáculos han afectado considerablemente las tareas de gestión del certificado, trabajo que, como declaré al comienzo, también se realiza desde AICACYP. Una labor que insumía el trámite de, aproximadamente, unas 700 u 800 credenciales, se ha visto abruptamente disminuida a unas 80 al mes. Tanto ha sido así, que esa Asociación ha debido desvincular a dos personas dedicadas a dichos menesteres.

Todos esos perjuicios son consecuencia directa o indirecta del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos, creado a partir de la Resolución 23/2016 e instrumentado en Disposiciones y Resoluciones posteriores. Antes de la implementación de ese sistema, no existían muchos de los perjuicios aquí detallados.

¹⁹ ARTÍCULO 5° — Créase el Registro de No Calificados Psicofísicamente para acceder a la condición de legítimo usuario, en el cual se asentarán los datos identificatorios de quienes hayan obtenido un certificado de NO apto emitido por el prestador seleccionado.

En base a lo expuesto, las disposiciones mencionadas, transgreden verosímilmente el derecho de trabajar y ejercer industria lícita (art. 14 C.N.), de propiedad (ar. 17 C.N.), de defensa (art. 18 C.N.), la razonabilidad (art. 28 C.N.) y la intimidad de los usuarios y postulantes (art. 19 C.N.), al tiempo que distorsiona la competencia (art. 42 C.N.), desde que una actividad que antes era realizada libremente por los profesionales médicos, médicos psiquiatras y psicólogos, fue entregada monopólicamente a un concesionario privado. Se vulneran, por último, las previsiones del art. 76 y 99.2 de la C.N. y la división de poderes.

7.3. Desvinculación de los objetos procesales

La medida solicitada no coincide totalmente con el objeto del proceso. En efecto, la pretensión principal consiste en que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.172 y de toda la legislación anterior no derogada, de la Resolución 23/2016 y concordantes dictadas en consecuencia de la ley 27.192, en la medida que ellas pretenden regular, a nivel nacional, el registro y la habilitación de quiénes pueden ser titulares de armas en todo el país y bajo qué condiciones pueden usarlas, tenerlas o portarlas.

Pero el dictado de la cautelar no implica que los tenedores y usuarios quedan en libertad de acción. Por el contrario, en primer lugar, la medida precautoria sólo afecta al alcance de ese régimen en las únicas jurisdicciones que –por virtud de la Resolución 54/2017 actualmente está vigente–, esto es, la Ciudad de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos, Córdoba y Santa Fe²⁰.

²⁰ ARTÍCULO 1°.- Establézcase a partir del 15 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos. Toda solicitud que se presente ante la ANMAC a partir de dicha fecha y que requiera la acreditación de aptitud psicofísica, deberá cumplimentarse con el certificado emitido a través del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos.

ARTÍCULO 4°.- Establézcase que lo dispuesto en los artículos precedentes será de aplicación a los trámites que ingresen en la Mesa de Entradas de la ANMAC en C.A.B.A y en las Delegaciones y Agencias Autorizadas en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Asimismo quedan comprendidos en dicha prescripción aquellos usuarios que de acuerdo a su Documento Nacional de Identidad, posean su domicilio radicado en las mencionadas jurisdicciones, independientemente del lugar de presentación del trámite.

En el art. 5 de las Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación del Concesionario prevea un escalonamiento en la vigencia del sistema:

“El servicio a contratar conforme al alcance definido en el artículo 4, será prestado en todo el territorio de la República Argentina, a implementarse de acuerdo a las siguientes etapas y plazos: (i) Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe antes del transcurso de los 60 días de firmado el acuerdo resultante del presente concurso, (ii) Provincias de Chubut, Corrientes, La Pampa, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Salta antes del transcurso de los 120 días de firmado el acuerdo, (iii) Provincias de Neuquén, Entre Ríos, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy y Formosa antes del transcurso de los 180 días de firmado el acuerdo y (iv) Provincias de Tierra del Fuego, Rio Negro, San Luis, Catamarca, Chaco y Misiones antes del transcurso de los 240 días de firmado el acuerdo...”

En segundo término, se está peticionando el re-establecimiento provisional del régimen vigente con anterioridad con relación al modo de acreditar la salud psicofísica del usuario/postulante, cuya constitucionalidad y vigencia también objeto pero que, solicito, se la postergue para la sentencia definitiva.

Si se considerara que, no obstante lo expuesto, existe coincidencia entre la cautelar y el objeto de la demanda principal, entonces no queda más remedio a esta parte que postular la inconstitucionalidad del art. 3 inc. 4 de la ley 26.854. Hay casos como el presente en los cuales la única forma de proteger y resguardar hasta el dictado de la sentencia definitiva los derechos cuya violación se denuncia es decretando una cautelar semejante. En efecto, dicho artículo viola el derecho de defensa y el debido proceso de AICACYP y de los restantes actores, desde que esa es la *única manera* en la que se pueden conjurar las violaciones que la normativa cuestionada actualmente les inflige e impedir que se sigan produciendo. Viola también la tutela judicial efectiva asegurada en el art. 25.1 de la CADH, en la medida que impide echar mano a un recurso existente (la medida cautelar) que los ampare *rápidamente* contra actos que violan sus derechos fundamentales.

Por las mismas razones, igual descalificación solicitamos respecto de la limitación del art. 5 de la ley 26.854. Agrego que esa limitación (seis meses con opción a otros seis meses de vigencia de la precautoria) por un lado, es inconsistente con la razón que motiva el dictado de una cautelar. Su establecimiento obedece a que, *prima facie*, el derecho invocado es verosímil y esa verosimilitud –en tanto el Estado no derogue la normativa cuestionada- subsiste durante su vigencia. Ergo, debe asegurarse el derecho a fin de que la sentencia definitiva se pronuncie útilmente; no tiene sentido dictar una cautelar para impedir que se siga provocando un daño por un lapso inferior al de vigencia de las normas cuestionadas. Por otro lado, los pleitos suelen extenderse más allá de los 12 meses. La demandada, no obstante, tiene un recurso sencillo para abreviar esa extensión: si ella no controvirtiera los hechos en los que la demanda se basa, la mayoría de los cuales son públicos y notorios, sin duda que se llegaría mucho más rápido a la sentencia definitiva pues estamos ante un pleito que bien puede clasificarse como de puro derecho. En último término, si se verificara un comportamiento desleal o temerario de esta parte, el código provee herramientas para conjurarlo (art. 36.1 CPCCN) y sanciones como para castigarlo.

VIII. DERECHO

Fundo el derecho de mis mandantes y patrocinados en los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 42 y concordantes de la Constitución Nacional; 25.1 de la CADH; arts. 5 a 7 de la ley 25.326 y demás normas citadas a lo largo de esta presentación.

IX. PRUEBA

Como prueba que hace al derecho de los actores, ofrezco la siguiente:

1. DOCUMENTAL:

- a. Poder especial emitido por AICACYP.
- b. Copia simple de las Resoluciones ANMAC 23/16 y 54/17.
- c. Curriculum Vitae del Dr. Bursztyn.
- d. Copia del cable de Telam del 31 de octubre de 2017.
- e. Copia de la Credencial de Legítimo Usuario del Sr. Juan A. Tegiacchi.

X. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Me tenga por presentado por parte, en el carácter invocado en lo que hace a AICACYP y por constituido el domicilio procesal y denunciado el real.
2. Tenga a mis patrocinados por presentados, por parte y por constituido el domicilio procesal y denunciados sus domicilios reales.
3. Tenga por iniciada la presente demanda contra EL Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), con domicilio en Bartolomé Mitre 1465, C.A.B.A.
4. Oportunamente haga lugar a la medida cautelar solicitada en el Capítulo VII.
5. Haga lugar a la demanda decretando la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 27.192, Resolución ANMAC 23/2016 y su Anexo I, Resolución ANMAC

54/2017 y resoluciones y disposiciones concordantes. Eventualmente, si se los considerare vigentes, declare la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 29 la ley 20.429/73 y 54 a 56 del decreto reglamentario 395/75 y de toda otra norma que los haya sustituido, conforme se ha alegado a lo largo de esta presentación.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA